



Reforma bancaria: ¿salvar a las cajas o regalárselas a los banqueros?

¿Por qué no se garantiza desde ya que las entidades que se nacionalizaran con dinero público no van a pasar luego a precio de saldo a la banca privada o a los fondos de inversión?

Aunque es pronto para saber el verdadero alcance de las últimas medidas financieras del gobierno no quiero dejar de manifestar mi opinión y preocupaciones sobre lo que se sabe de ellas hasta el momento.

La ministra de Economía ha anunciado que aumenta la exigencia de capital a las entidades financieras. Las cajas que no cumplan esas exigencias solo podrán hacerlo convirtiéndose en bancos. Si no lo logran, el gobierno advierte que las nacionalizará. Me surgen entonces varias preguntas y un temor:

- ¿Cómo es que se ha estado diciendo que el sistema financiero español era extraordinariamente solvente y ahora se sale con esto? Hay que exigir que se acabe ya con la ocultación y el disimulo contable y denunciar al Banco de España que no es capaz de garantizar que los españoles sepamos de verdad cuál es la situación real del sistema bancario y financiero.

- ¿Por qué obligar a que las cajas se conviertan en bancos renunciando así a su carácter de servicio público? Se puede conseguir mejor el objetivo de solvencia y

adecuada financiación de la economía manteniendo su vinculación al servicio público. Lo que precisamente ha fallado de las cajas de ahorros es que en lugar de servir a los intereses públicos han actuado con la lógica de la banca privada y ahora se les quiere convertir en esto último. Justo lo contrario de lo que se debería hacer.

- ¿Por qué se insiste tanto en la mala gestión de las cajas cuando la inmensa mayoría de los directivos y banqueros que en los últimos años han sido condenados por estafas o engaños financieros, o que han sido salvados de ser juzgados solo gracias a su poder político, han sido precisamente los de la banca privada?

- ¿Por qué no se garantiza desde ya que las entidades que se nacionalizaran con dinero público no van a pasar luego a precio de saldo a la banca privada o a los fondos de inversión que son, ¡qué casualidad!, los que están impulsando y aplaudiendo esta medida?

- ¿Cómo es que el gobierno sigue dando vueltas, cediendo sin límite a los grupos financieros y no toma las riendas para garantizar de una vez que se resuelva el problema principal de nuestra economía en estos momentos que es la falta de financiación de las empresas y los consumidores?

- ¿Cómo se sigue consintiendo la usura de la banca que está prestando dinero incluso al 15% a los empresarios que quieren poner en marcha actividades económicas para crear riqueza y empleo? ¿Cómo se permite eso cuando los bancos están recibiendo dinero público incluso al 1%? ¿Por qué se permite que en lugar de financiar a la actividad productiva dediquen sus recursos a especular con la deuda de los gobiernos y a destruir sus economías? ¿Por qué no se actúa inmediatamente contra esos banqueros e inversores que están practicando auténtico "terrorismo financiero", tal y como denunció con razón el Presidente de la Junta de Andalucía?

No quiero hacer juicios de intenciones pero la medida que acaba de tomar el gobierno y la forma y el momento en que lo ha hecho me produce un enorme temor. Huele demasiado a una estrategia clara: dar más dinero a los bancos a cambio de nada, y sanear primero a las cajas para entregárselas después a los bancos privados para que estos tapen con su patrimonio, con su cuota de mercado y con el dinero de toda la ciudadanía el agujero que ha producido su irresponsable y delictiva gestión financiera durante estos últimos años.

Si esto ocurriera finalmente, como me temo que puede ocurrir, se tratará de un robo gigantesco a la sociedad y al que los ciudadanos y ciudadanas decentes tendríamos que oponernos por todos los medios pacíficos y democráticos que tengamos a nuestro alcance.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada

http://h133.dinserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jt/index.php?option=com_content&task=view&id=2087&Itemid=16

Crisis de liquidez o de solvencia

Los mensajes de los gobiernos acostumbra a soslayar más que a explicar los problemas y a contentar a la población con mentiras piadosas. Por ejemplo, desde el principio de la crisis se ha venido reconociendo que la banca y la economía española tienen problemas de liquidez, pero nunca de solvencia, como si de realidades ajenas se tratara. Ahora se invoca la transparencia contable con ánimo de demostrar dicha solvencia, a la vez que se soslayan los factores que transforman la iliquidez en insolvencia. Estos factores tienen que ver con la

capacidad y el instrumental de que disponen los estados para acometer sus obligaciones de pago y con la valoración del activo de las empresas.

Es la propia normativa de la UE la que ha generado la crisis de la deuda pública que la atenaza, al unir la capacidad de gasto y endeudamiento de los estados con su incapacidad para emitir moneda con la que hacer frente a sus obligaciones de pago. Y al limitar la posibilidad de rembolsar la deuda pública a la obtención de ingresos tributarios, es lógico que surgieran dudas sobre la solvencia de aquellos estados que más vieron dispararse su deuda y recortarse sus ingresos con motivo de la crisis.

Pero no es la deuda pública, sino la privada –mucho más elevada y concentrada en el ladrillo– la que empaña la credibilidad de la economía española. Solamente la deuda hipotecaria de la economía española supera el billón de euros, doblando el importe de la deuda pública. La parte de esa deuda que soportan los hogares aguanta relativamente bien, pero no ocurre lo mismo con los préstamos a las empresas promotoras y constructoras (que en nuestro país triplican a los concedidos a la industria). Es aquí donde aumentaron notablemente la morosidad y los impagos, induciendo a la banca a refinanciar deudas y a quedarse con promociones de empresas en crisis. Si se suma al crédito concedido al sector el importe de los inmuebles que pasaron a ser propiedad de la banca, se observa que esta, en vez de reducir, ha ampliado sus riesgos asociados a la promoción inmobiliaria. Con unos precios inmobiliarios cuya caída se prolonga desde hace más de tres años, ya va siendo hora de reconocer que los problemas de iliquidez han mudado en insolvencia para buena parte de las empresas del sector y de revisar la política de refinanciación y acumulación de inmuebles que ha venido demorando el ajuste inmobiliario y agravando los problemas de la banca.

José Manuel Naredo es economista y estadístico.

Público, 28 de enero de 2011

El mayor desmán financiero de nuestra historia

Tengo en el cuerpo la incómoda sensación de que estamos a punto de cometer el mayor desmán financiero de nuestra historia: la entrega de la mitad, ¡la mitad!, del sistema financiero español, a precios de saldo y desguace, a bancos, inversores privados y "fondos buitres", como les llama un conocido y reputado analista financiero, José Carlos Díez, en su *blog*.

Vamos a privatizar la mitad local y social de nuestro sistema a precios de saldo y desguace

Quizá este malestar es debido a un arrebato de patriotismo. En cualquier caso, las consecuencias serían muy importantes. Primero, una concentración desmedida y una disminución significativa de la competencia bancaria, cuyos perjudicados serán familias, profesionales y pequeñas y medianas empresas. Segundo, la aparición de riesgo de exclusión financiera para personas con baja cultura financiera, que tenían en la proximidad de las oficinas de las cajas un servicio público que los bancos no prestarán. Tercero, la pérdida de la Obra Social de las cajas, que actúa como un segundo Estado de bienestar, al atender a situaciones sociales adonde no llegaban las políticas públicas. Y, cuarto, la pérdida de un instrumento de dinamización cultural, especialmente en zonas pobres o alejadas.

El valor económico que se perdería para la sociedad en su conjunto sería inmenso. Muchísimo mayor que el valor patrimonial o contable, que es lo que ahora está en juego.

Si queremos preservar ese valor económico, la solución no es la fuga hacia delante, para entregarlas a inversores privados. La solución es la vuelta atrás, hacia lo que nunca deberían haber dejado de ser.

Las cajas son una institución financiera peculiar. Su mercado geográfico natural es el local y provincial. Y su función natural el crédito a las familias y pymes. Ese mercado y esa operativa eran coherentes con una específica estructura de propiedad distinta de la de los bancos.

Ha sido una historia de éxito, hasta ahora.

A esta situación se ha llegado a través de un largo camino de despropósitos. Son muchos los que han colaborado: legisladores, autoridades, reguladores, supervisores y las propias cajas.

Legisladores, autoridades económicas y monetarias han puesto un empeño digno de otras causas en liberalizar las cajas para romper sus fronteras geográficas naturales y dejar que hicieran todo lo que hacían los bancos. No midieron los riesgos. Esa libertad que se otorgó a los directivos chocaba con la lentitud de sus órganos de gobierno a la hora de tomar decisiones en momentos de crisis.

Los directivos aprovecharon esa liberalización para una expansión irresponsable y para concentrar las inversiones en inmuebles y suelo. Como los depósitos de los impositores no daban para financiar la expansión crediticia, se endeudaron hasta las cejas en los mercados europeos de capital. Riesgo inmobiliario y alto endeudamiento ha sido un cóctel explosivo.

Lo más sorprendente es ver cómo el supervisor, el Banco de España, dejó crecer ese riesgo y endeudamiento. Su labor de vigilancia y supervisión ha sido manifiestamente mejorable. La situación actual cuestiona su labor, al menos hasta 2007. No vale ahora echarle la culpa a la "politización" de las cajas. No puede lavarse las manos. Alguna explicación merecen los españoles y que la autoridad bancaria les diga qué hará en el futuro para desarrollar mejor su función.

Las autoridades autonómicas y locales han puesto su grano de arena. Al buscar una solución en los matrimonios endogámicos han empeorado la situación. La unión de dos contagiados no da lugar a uno sano.

Finalmente, el Gobierno ha estado creyéndose durante demasiado tiempo su propia mentira: que teníamos el mejor sistema bancario del mundo mundial. Faltó diagnóstico precoz para ver el contagio y diligencia en la aplicación de la medicina que tenía a mano: el propio Fondo de Garantía de las Cajas y el FROB. Ahora todo son prisas y precipitaciones. Y así nos va.

La solución para preservar el valor económico que las cajas tienen para la sociedad y la economía española es la intervención temporal y la depuración de responsabilidades. Esa intervención no debería llevar aparejada la obligación de conversión en bancos. Al contrario, debería forzar a las cajas intervenidas a dar un paso atrás: volver a recuperar su ámbito de negocio natural. No es imposible. Así se ha hecho en otros momentos de reforma bancaria.

¿Cuánto costaría la intervención? La vicepresidenta Elena Salgado ha estimado que unos 20.000 millones adicionales, incluyendo bancos. En total, un 3% del PIB. Cantidad manejable, y más productiva que los gastos faraónicos en el AVE. Y menor del 6% del PIB que costó la intervención del sector privado bancario en los años ochenta, desde Rumasa hasta Banesto. En todo caso, ese coste no es nada comparado con el valor económico que se perdería con la desaparición de las cajas.

Creo que vale la pena salvar las cajas. Si no, el epitafio de los historiadores de nuestro sistema financiero será que "entre todos la mataron, y ella sola se murió".

Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona.

En el siglo XIX, la tierra. En el último tercio del siglo XX, la empresa pública. Respetando las diferencias de cada caso, fueron objeto de operaciones políticas de gran trascendencia: una "desamortización" que se proponía liberar recursos de capital y entregarlos al mercado para beneficio general. Lo que parecía claro en la intención, lo fue mucho menos en el resultado. Vale la pena recordarlo cuando en el arranque del XXI, las cajas de ahorros aparecen como objeto de una tercera desamortización.

España opta por entregar esta banca social al capital privado

La desamortización de la tierra -desde finales del XVIII hasta bien avanzado el XIX- pretendía la transformación de una sociedad atrasada. La resistencia de la Iglesia a la confiscación de su patrimonio acaparó la atención de contemporáneos e historiadores. Quedó en la penumbra que una parte muy sustantiva de lo incautado correspondía a bienes comunales arrebatados a los Ayuntamientos y otras entidades locales. Los promotores ilustrados de la desamortización entendían que una distribución de la propiedad agraria entre los campesinos pobres tendría efectos positivos en lo económico y en lo político: configuraría una estructura de la propiedad semejante a la de los países más avanzados y liberaría energías para el progreso colectivo. Pero la gestión de la desamortización no se propuso una distribución equitativa de la propiedad: apuntó a obtener los máximos ingresos para la Hacienda pública y del modo más rápido. Los tenedores de los títulos de deuda pública pudieron utilizarlos para adquirir tierra desamortizada: estaba claro que entre ellos no figuraban los campesinos pobres o los jornaleros.

¿Qué resultado produjo aquella gran operación? El dictamen de los historiadores es concluyente. No alteró la estructura de la propiedad (Herr). Cambió de manos, pero respetó o incluso acentuó el latifundismo en las zonas meridionales sin modificar demasiado la propiedad en otras regiones. En boca de un autor de talante liberal, "las víctimas de la desamortización fueron la Iglesia, los municipios y los campesinos pobres y proletarios agrícolas" (Tortella). Tampoco avanzó la sociedad española. Con la desamortización se desaprovechó una oportunidad histórica, agravando desigualdades sociales y provocando violentos conflictos agrarios hasta la misma guerra civil de 1936.

Salvando lo que haya que salvar en toda analogía, la privatización de la empresa pública en el último tercio del siglo XX siguió también un curso discutible. Movidos por el doctrinarismo neoliberal y por la necesidad de recaudación, los Gobiernos de Felipe González y de José M. Aznar "liberaron para el mercado" a empresas públicas o participadas por el Estado: Endesa, Repsol, Telefónica, Tabacalera, Iberia, Aldeasa, Argentaria, etcétera. También y especialmente las que obtenían resultados positivos. Uno de los argumentos esgrimidos fue la necesidad de favorecer la competencia libre, asegurar una mayor eficiencia y con ello beneficiar a los usuarios. ¿Ha sido este el resultado? No parece que tales privatizaciones hayan liberado a los ciudadanos-consumidores de la posición dominante de los grandes proveedores. No han transformado de modo sustancial su carácter oligopolista. Y el gobierno interno de estos "latifundios" industriales y de servicios tampoco da ahora muestras espectaculares de mayor transparencia y responsabilidad ante usuarios, *stakeholders* y pequeños accionistas. Buena lección tal vez para prepararse para nuevas privatizaciones en lo que queda del sector público.

Con la reforma de las cajas, parece llegar una "tercera desamortización". La gran crisis exige ahora operaciones de salvamento para algunas cajas, aunque no para todas ellas. Pero, a diferencia de la nacionalización temporal de la banca privada emprendida en Reino Unido o incluso en Estados Unidos, España opta por entregar esta "banca social" al capital privado. Percibidas por algunos como una anomalía del capitalismo financiero cuando en realidad suplían algunas de sus carencias, las cajas han sido objeto del asedio continuo de sus competidores: la banca privada. Es cierto que en algunos casos han sido también víctimas de sus propios errores. O, mejor, de los errores de algunos de sus responsables, seducidos por prácticas y modelos de una banca mercantil contra la que competían. Es esta banca -española o internacional- la

que ahora espera reforzar su posición oligopolista con la "desamortización" de las cajas. Con ella es previsible la evaporación de su aspecto social que no se limita a la "obra social", sino que se extiende a la prestación de servicios financieros a sectores poco atendidos por otras instituciones.

De la información disponible, se desprende que entre los responsables actuales de algunas cajas hay quienes no renuncian a salvaguardar su carácter y objetivos característicos. Les honra. Me pregunto, sin embargo, si han intentado movilizar el apoyo ciudadano -y no solo el de algunas élites- que pudiera reforzarles en la dura batalla entablada. Porque no se trata de una disputa entre expertos financieros y económicos que sostienen propuestas técnicas diferentes. Es una batalla política con consecuencias que recaerán sobre toda la sociedad y, especialmente, sobre los sectores populares. Tratados solamente como clientes o como impositores, no se ha trasladado a los ciudadanos todo lo que se juega para sus intereses en esta nueva "desamortización". Se ha olvidado así un aliado imprescindible cuando se ventilan asuntos políticos en el sentido más genuino del término. ¿Estamos a tiempo de corregir este olvido?

Josep M. Vallès es catedrático de Ciencia Política (UAB).

El País, 26 de enero de 2011